

¡Defender el proceso de paz! ¡Defender las libertades democráticas!

[Jesús Gualdrón

Encontrar la salida de una confrontación que se ha extendido por más de cincuenta años y dejado más de doscientos mil muertos, más de seis millones de desplazados, decenas de masacres y miles de ejecuciones extrajudiciales por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas nacionales, entre muchas otras víctimas, es un imperativo ético y político, el cual no se puede seguir soslayando con excusas tramposas por parte de la elite dominante en el país.

No hay alternativa posible para la paz, y es hora de avanzar en la búsqueda de la verdad sobre el conflicto, establecer las responsabilidades y llegar a un acuerdo sobre las garantías de no repetición, el resarcimiento de las víctimas y los mecanismos de justicia que hagan posible un acuerdo final. No pareciera lógico pensar que sólo una de las partes involucradas –en este caso las FARC-EP– tenga que asumir de manera exclusiva la responsabilidad por las víctimas del conflicto, máxime cuando es innegable que el origen de la confrontación y su persistencia no son achacables a la insurgencia armada. Aquí es impostergable evaluar la responsabilidad de quienes han gobernado tradicionalmente y convertido al Estado colombiano en un instrumento de dominación violenta al servicio del capital nacional y transnacional. Por otra parte, está demostrada hasta la saciedad la responsabilidad de innumerables agentes del Estado –incluso en connivencia con las organizaciones paramilitares que han asolado y sembrado de muerte



y dolor extensas zonas del país– y de sectores políticos y económicos, tanto a nivel nacional como regional, en las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, en la destrucción de las organizaciones y del movimiento social y en la eliminación a sangre y fuego de formaciones políticas alternativas a lo largo y ancho de nuestro suelo.

Por esa razón, los avances logrados en la las negociaciones de La Habana constituyen un patrimonio del pueblo colombiano en su búsqueda de la paz y la convivencia nacional. No es aceptable que se desvirtúen los acuerdos a que se ha llegado en varios puntos de la Agenda, aunque no estén perfeccionados, ni que se desprecie olímpicamente el aporte de las FARC-EP para desescalar el conflicto mediante la implementación de un cese unilateral al fuego. Si bien el primero de ellos fue sistemáticamente saboteado por el establecimiento, tanto mediática como militarmente, el segundo (ordenado a partir del 20 de julio pasado) puede significar un cambio cualitativo en la coyuntura nacional y –de mediar una verdadera decisión política por parte del Gobierno de Santos a favor de la paz– conducir a la concreción de un cese bilateral, cuyo impacto en el desarrollo de las conversaciones de La Habana y en el apoyo de la población a la salida negociada sería de enorme trascendencia. No pueden sustituirse la negociación y el diálogo por la arrogancia y la intransigencia militarista. Aun sin llegar a acuerdos definitivos es dable y necesario evitar muertes, destrucción y mayor odio entre los colombianos. Y esa no es una responsabilidad

exclusiva de las FARC-EP, como quisieran hacernos creer el Gobierno y los medios de comunicación serviles.

Pero es necesario también llamar la atención de la opinión nacional e internacional sobre ciertos rasgos autoritarios del establecimiento colombiano que no parece querer avenirse con la idea de que la protesta social y la organización de los de abajo no constituyen un crimen, sino un derecho. En efecto, hemos asistido en las últimas semanas a la reedición abierta y desembozada de la cacería de brujas, que en esta oportunidad se enfila contra jóvenes estudiosos y activistas de organizaciones sociales y políticas que ejercen su crítica contra el sistema de dominación imperante y hacen uso de su derecho de expresión y movilización. ¿Estaremos frente a una nueva etapa de montajes judiciales, de persecución política contra la oposición democrática so pretexto del “terrorismo”, independientemente de lo que sea que la palabreja signifique realmente? ¿Se estará inaugurando una nueva arremetida contra la libertad de pensamiento, en cuyo desarrollo incluso los libros y las conversaciones telefónicas se conviertan en “pruebas” de la culpabilidad de los ciudadanos inconformes y organizados?

En el marco de las conversaciones de La Habana y ante la expectativa de una posible etapa de posacuerdo, en la que con seguridad se desatará el torrente de las luchas sociales y se impulsará la recomposición y movilización de las organizaciones populares en función de sus reivindicaciones y de la preservación y ampliación de los derechos democráticos de los de abajo, urge mantener la guardia en alto para no permitir que el autoritarismo del Estado de la mano de un ejercicio espurio de la justicia de clase se convierta en remozada talanquera para burlar nuevamente las aspiraciones libertarias de los colombianos. La superación de la confrontación armada como forma de resolver el conflicto político y social colombiano no significa la renuncia a la lucha por la justicia social en nuestro país.



DATOS IMÁGENES

Las imágenes presentadas en este número fueron tomadas de las fuentes indicadas en cada pie de foto.

***Portada:**

https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-austerity_movement_in_Greece

***Bandera:**

<http://blogs.ft.com/gavyndavies/tag/greece/> | Getty Images

***Página actual:**

<http://www.independent.co.uk/news/world/europe/greek-police-clash-with-protesters-6263678.html>